



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53

SESIÓN PÚBLICA NÚM. 31 ORDINARIA

MARTES 18 DE ABRIL DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del martes dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número treinta ordinaria, celebrada el lunes diecisiete de abril del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes dieciocho de abril de dos mil diecisiete:



Sesión Pública Núm. 31

Martes 18 de abril de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

1. 119/2015

Recurso de queja 119/2015, interpuesto por el titular de la Dirección General de Administración Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en contra de auto dictado el veinticuatro de julio de dos mil quince, por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto 1309/2013-IX, por el que se le impuso multa. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *“PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por [REDACTED] por propio derecho y como titular de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. SEGUNDO. Se confirma la multa impuesta en acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil quince, en los autos del juicio de amparo 1309/2013-IX, instruido en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando primero, relativo a la competencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.



Sesión Pública Núm. 31

Martes 18 de abril de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando segundo, relativo a la procedencia.

Recordó que este caso fue remitido a esta Suprema Corte por el tribunal colegiado correspondiente, al haber estimado que debía pronunciarse respecto de las razones de insuficiencia presupuestaria para no dar cumplimiento oportuno a la sentencia de amparo. Este Alto Tribunal ejerció su facultad de atracción para definir si resulta procedente o no el recurso de queja contra la imposición de multas en un procedimiento de cumplimiento de sentencia de amparo.

Precisó que esta queja y la siguiente guardan una estrecha relación con el incidente de inejecución de sentencia 550/2015, resuelto en la sesión pasada.

Indicó que el proyecto propone determinar la procedencia del recurso de queja en atención al artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo: “El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: [...] e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional”, hipótesis que sucedió en el caso concreto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Aclaró que, no obstante que existe jurisprudencia del Tribunal Pleno en el sentido de que en el incidente de inejecución de sentencia debe hacerse el pronunciamiento respecto de las multas impuestas a las autoridades responsables en el cumplimiento de la sentencia, no sería motivo suficiente para privar a las autoridades vinculadas al cumplimiento de una sentencia de amparo de la posibilidad de recurrir esas sanciones para obtener el cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, no desconoció que la Segunda Sala tiene el criterio contrario: no es procedente el recurso de queja, en tanto que el tema de las multas se revisará en el incidente de inejecución respectivo, por lo que deben impugnarse a través del recurso de inconformidad en contra del auto que tenga o no por cumplida la sentencia de amparo.

Reiteró que es más práctico dar a esas autoridades acceso al recurso de queja de inmediato ante una imposición de multa, y no tener que esperar hasta que se defina si ya se cumplió o no la sentencia o, en su caso, hasta que llegue a esta Suprema Corte el incidente de inejecución correspondiente.

El señor Ministro Pérez Dayán apuntó que uno de los principios rectores del juicio de amparo consiste en que, toda aquella parte que se vea perjudicada por una determinación judicial, tenga la mínima posibilidad de combatirla ante una instancia superior.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recapituló que la Segunda Sala emitió su criterio al reflexionar acerca de la importancia de la celeridad en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siendo que, en la práctica, el recurso de queja en contra de las multas del juez hacia las autoridades dilataban dicho cumplimiento, por lo que se limitó su procedencia, en la inteligencia de que esas sanciones no tienen el carácter de irreparables, sino que pueden ser revisadas a través del incidente de inejecución de sentencia. Refirió que existen supuestos en los que no se abrirá dicho incidente, por ejemplo, cuando el juez emita un acuerdo que tenga por cumplida la ejecutoria.

Advirtió que, en la resolución del incidente de inejecución de sentencia 550/2015, se revisó la pertinencia de la multa, aduciendo que su imposición fue correcta, fundada y motivada.

Estimó que, en el caso, la multa se impuso por no cumplir la ejecutoria y, si la multa pudiera ser recurrida en queja y se resolviera por el tribunal colegiado antes del pronunciamiento por esta Suprema Corte del incidente de inejecución de sentencia, ello implicaría que previamente el colegiado resuelva el fondo del cumplimiento, lo cual tergiversa y mezcla entre la imposición de una multa, por sus propios fundamentos y motivos, y el incumplimiento de la ejecutoria. Reconoció la necesidad de la existencia de un medio de defensa, pero si la queja propicia que se resuelva parte de la materia del incidente de inejecución de sentencia,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

se daría a entender que la ley tiene dos recursos para resolver lo mismo, lo cual es difícil de explicar y soportar.

En este sentido y dado lo resuelto en el incidente de inejecución de sentencia 550/2015, consideró que únicamente resta determinar lo que procesalmente sucederá con esta queja, esto es, ha quedado sin materia porque se determinó que las multas estuvieron bien impuestas, por lo que, de pronunciarse en sentido contrario, se generaría una incongruencia con la decisión inicial.

Retomó que la procedencia en el caso específico no se surte, además de que la jurisprudencia, contrario a lo que sostiene el proyecto, prevé la manera en que la autoridad defiende la reparabilidad de la multa impuesta. Por ello, se manifestó en contra de la procedencia.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció de acuerdo con el proyecto porque, por un lado, la queja contra una multa no suspende el procedimiento, ya que no se está en ninguno de los supuestos del artículo 102 de la Ley de Amparo y porque, por otro lado, el incidente de inejecución de sentencia no se puede suspender.

Aclaró que su voto en la sesión de ayer no se contradice con lo que hoy sostiene, ya que existen diversos precedentes del Tribunal Pleno en el sentido de que, para efectos del incidente de inejecución de sentencia, no hay cosa juzgada, por lo que la resolución del asunto de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

sesión pasada no implica que la queja sea improcedente en contra de la imposición de esas multas.

Reflexionó con la exposición del proyecto que, de resolverse en contrario, se llegaría al extremo de generar una improcedencia a partir de una cuestión práctica, con su consecuente estado de indefensión para las autoridades.

La señora Ministra Piña Hernández coincidió con el proyecto y las razones del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, especialmente porque la interposición de la queja no suspenderá el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia, de acuerdo con la Ley de Amparo.

Diferenció entre la procedencia del recurso de queja y que quede sin materia en función de lo resuelto en el incidente de inejecución de sentencia. Obligada por el voto mayoritario de la sesión anterior, estimó que se podría revisar de oficio la legalidad de las multas, en atención a los agravios que hicieron valer las autoridades en la queja. Observó que esos agravios no fueron analizados en el incidente de inejecución de sentencia. Aclaró que entre las resoluciones de ambos asuntos no habría contradicción alguna porque se analizan cuestiones diferentes. Por tanto, consideró que, en el caso, no quedaría sin materia la queja mas ello tampoco limita su procedencia.

Recordó que, en la Ley de Amparo abrogada, se mencionaba la irreparabilidad después de dictada la sentencia, lo que ya no indica la ley vigente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Se refrendó en favor del proyecto en cuanto a la procedencia, pues se deja en estado de indefensión a la autoridad a la que se le impone la multa, independientemente de las diversas hipótesis que pudieran configurarse, por ejemplo, que un juez multe a una autoridad que no sea responsable o no esté vinculada, con lo que tendría que esperarse a que se revisara el incidente de inejecución de sentencia para impugnar una multa que no le correspondía.

Cuestionó qué tan viable sería establecer, por ejemplo, en los incidentes de inejecución con interposición de queja, que se analizaran conjuntamente, porque si, en función de la facultad delegada, los tribunales colegiados consideran que el procedimiento no se llevó conforme a la ley, procede la reposición de ese procedimiento para lograr el cumplimiento, con lo cual resultaría procedente la queja, pero quedaría sin materia. Valoró que esta sería una solución práctica sin presentar problema alguno, máxime que, en el momento en que se abre un incidente de inejecución de sentencia, la imposición de la multa significa que una autoridad no cumplió la sentencia y, en el momento de la revisión, se debe determinar si ese incumplimiento está justificado o no.

Por tanto, consideró que el recurso procedente contra la multa es la queja.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que el incidente de inejecución de sentencia y las multas están estrechamente relacionadas porque se trata del mismo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria, es decir, las multas se imponen cuando no se cumple.

Precisó que, en la discusión de la Segunda Sala, se analizaron distintas aristas, entre ellas, que no necesariamente los tiempos se dan en las mismas circunstancias, por ejemplo, a veces el incidente no ha llegado a esta Suprema Corte y la queja ya está interpuesta en contra de las multas y, por tanto, se optó por determinar que la queja era improcedente porque, de acuerdo con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo —“El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: [...] e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional”—, si no procede recurso de revisión y causa un daño que no se va a reparar en la sentencia definitiva, procede la queja; sin embargo, ese no es el caso porque se trata de un procedimiento posterior al dictado de la sentencia y, si se va a analizar si la multa por incumplimiento de sentencia fue impuesta correctamente o no, se debe estudiar primeramente dicho cumplimiento, lo cual no es posible hacerlo en la queja, sino cuando llega a esta Suprema Corte el incidente de inejecución de sentencia, como en el caso particular.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por lo anterior, valoró que no es procedente la queja en contra de la multa por no cumplir la sentencia, puesto que en dicho recurso no se analizará el cumplimiento en sí de la ejecutoria.

Coincidió con la señora Ministra Piña Hernández en cuanto a que la queja no suspende el procedimiento y, por esa razón, se dijo en la Segunda Sala que la queja era improcedente en contra de una multa impuesta por incumplimiento de sentencia. Por otra parte, indicó que, si bien pueden esgrimirse otro tipo de agravios, los importantes son los que servirán para determinar si se cumplió o no la sentencia.

Recordó haber votado en contra del fondo en el asunto discutido en la sesión pasada, ya que la imposición de las multas fue hacia autoridades a las que no les correspondía el cumplimiento de la sentencia, en atención a la jurisprudencia de esta Suprema Corte en el tema de las etapas que deben agotarse en tratándose del cumplimiento de sentencias de amparo a los miembros de seguridad pública de la Ciudad de México. Por esa razón, opinó que la multa del caso no fue impuesta correctamente.

Observó que, conforme al procedimiento del incidente de inejecución de sentencia, se da a la autoridad la oportunidad de expresar si cumplió adecuadamente la sentencia o no, cuando —independientemente del órgano que provenga— esta misma Suprema Corte requiere nuevamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

autoridad rinde su informe, lo cual también será materia de análisis en la determinación total del cumplimiento de sentencia.

Resaltó la importancia de no establecer dos medios de impugnación para una misma situación, por lo que debería quedar solamente la vía de análisis hasta que se determine en definitiva el cumplimiento de la ejecutoria en el incidente de inejecución de sentencia porque, de lo contrario, se desvirtuaría la materia de la queja, a saber, resolver algo que no influirá en la decisión última.

Apuntó que la autoridad no es sujeto legitimado para interponer la inconformidad; no obstante, se ha resuelto que, cuando alguien está agraviado contra determinado acto, hay legitimación para interponer este medio de defensa, por lo que no resultaría incorrecto que la autoridad lo haga en el momento en que el juez de distrito señale que la sentencia está cumplida y haya multas impuestas en su contra. En ese tenor, manifestó que no se le deja en estado de indefensión, sino que, en todo caso, debe darse coherencia al sistema de cumplimiento de sentencia, con el fin de no establecer dos medios de defensa diferentes para poder analizar el mismo cumplimiento, con el riesgo de arribar a resoluciones contradictorias.

La señora Ministra Piña Hernández concordó con la señora Ministra Luna Ramos en que, en el fondo del incidente de inejecución de sentencia, debe resolverse si fue cumplida o no.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Estimó que, para hacer coherente el sistema, por ejemplo, deberían declararse inoperantes los agravios de la autoridad que aludan al cumplimiento, pues serán materia del incidente de inejecución; sin embargo, expresó reserva en cuanto a si esta Suprema Corte debe analizar, de oficio y en la resolución de dicho incidente, si la multa estuvo bien impuesta, pues se trataría de vicios propios de esa sanción.

Discordó en cuanto a establecer, para controvertir una multa, el recurso de inconformidad en contra del auto que tuvo por cumplida la ejecutoria, pues abriría una vía totalmente diferente. Por tanto, reiteró estar en favor del proyecto y su conclusión de que la multa debe combatirse a través de la queja y, a través del incidente, el fondo del cumplimiento.

El señor Ministro Laynez Potisek concordó con la señora Ministra Luna Ramos en que la Ley de Amparo vigente ubica el problema en la fase del cumplimiento de las ejecutorias de amparo, puesto que su artículo 192 prevé que “Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.

En el caso, acotó que se trata de una sentencia firme, una cosa juzgada que busca únicamente su cumplimiento, con autoridades responsables perfectamente identificadas y, si alguna de las autoridades a las que se dirige el juez de distrito no tiene injerencia en dicho cumplimiento, precisamente tiene tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga y, con ello, se evite la interposición de múltiples recursos.

Aclaró que, por un lado, la procedencia de la queja se vincula con violaciones graves y trascendentes y, por otro, los agravios de la autoridad son de falta de debida motivación, más precisamente, porque para cumplir, era esencial contar con suficiencia presupuestal, razón que no puede ser tomada en cuenta seriamente para obstaculizar el cumplimiento de una sentencia, a diferencia de una prórroga o plazo para que la autoridad realice los trámites internos necesarios para obtener los recursos.

Advirtió que otro de los agravios esgrimidos fue la falta de certeza jurídica, en tanto que el juez de distrito no le aclaró que procedería una multa en caso de no cumplir en el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

plazo estipulado. Al respecto, consideró que el juez no tiene por qué indicarle a la autoridad cuál es el procedimiento interno que debe seguir para cumplir la sentencia, en razón de que dicha autoridad debe conocer perfectamente el mecanismo para cubrir la suficiencia presupuestaria. Por tanto, se apartó del criterio del Tribunal Pleno, en tanto que la autoridad responsable en la sentencia de amparo debe saber o tendrá que indagar, en los plazos que da la ley, cómo cumplir y en dónde buscar los recursos presupuestarios.

El señor Ministro Pérez Dayán concordó en que las quejas no suspenden de derecho, pero sí de hecho, ya que el juez no remite un incidente de inejecución de sentencia si sabe que hay quejas interpuestas en contra de las multas por falta de cumplimiento. Aclaró que, en el caso, no se presentó ningún agravio en cuanto a la cuantificación del cumplimiento, sino respecto de la falta de fundamentación y de motivación, no se advirtió que había insuficiencia presupuestal y porque tenía que haberse dirigido a la autoridad que administra financieramente la entidad.

El señor Ministro Franco González Salas respaldó lo dicho por la señora Ministra Piña Hernández, en cuanto a que no existe disposición expresa que resuelva el problema, por lo que debe interpretarse el marco jurídico.

Precisó que, en la Segunda Sala, se llegó a la conclusión plasmada en su tesis, la cual sigue compartiendo, además de las razones expuestas en su momento, porque la



multa se impone a la persona, no en su carácter de autoridad. Por lo anterior, se expresó en contra del proyecto.

El señor Ministro Medina Mora I. recordó que, en la sesión pasada, votó en favor del proyecto que determinaba que la multa fue bien impuesta para cumplir la sentencia de amparo. Asimismo, coincidió en que es obligación de la autoridad conocer los mecanismos para cumplir con la sentencia de amparo y en que la hipótesis del artículo 97 de la Ley de Amparo requiere la actualización de una circunstancia de naturaleza trascendental y grave, lo que no ocurre en el caso. En ese sentido, se inclinó por la improcedencia de la queja en contra de esas multas y, por tanto, en pro del criterio de la Segunda Sala.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales externó duda respecto de las implicaciones del recurso de queja, a saber, en cuanto a que, si el tribunal colegiado debe resolver desde dos puntos de vista —el cumplimiento de la sentencia y algunos vicios que tuviera la imposición de la multa—, esta Suprema Corte podría o no, en el incidente de inejecución de sentencia o en la inconformidad, volver a tratar el tema de la multa. Asimismo, en caso de que el juez haya considerado cumplida la sentencia y, por tanto, no se interpuso inconformidad ni se suscitó un incidente de inejecución de sentencia, cuestionó si la autoridad no podría interponer un recurso de queja.

Con lo anterior, ejemplificó que existen muchas variables que están pendientes de meditarse.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Apuntó que, en principio, la interposición de la queja conlleva la posibilidad de estudiar las dos cuestiones: si se cumplió o no la sentencia y si tiene o no algún vicio la imposición de la multa; sin embargo, deberá analizarse cada caso en particular. Por ende, consideró que resulta preferible optar por la procedencia de la queja para valorar cualquiera de estas cuestiones y, en caso de que posteriormente se estudie en esta Suprema Corte un caso con características diversas u otras variables, determinar el criterio correspondiente.

El señor Ministro Pérez Dayán advirtió que, si se resolviera la queja y se considerara fundado el agravio, la sentencia estaría cumplida, por lo que el quejoso no tendría oportunidad de inconformarse porque, contra esa resolución, no cabe recurso alguno.

La señora Ministra Luna Ramos puntualizó que, en el caso concreto, ninguno de los agravios está encaminado a combatir el monto ni que se haya dirigido a una autoridad que no le correspondía cumplir, sino a la fundamentación y motivación del cumplimiento exigido.

La señora Ministra Piña Hernández aclaró que la autoridad esgrimió otro agravio, referente a que el juez de distrito no tenía facultades para girar el oficio para hacer efectivo el cobro de la multa, es decir, se implicaron también cuestiones de forma, no solamente de fondo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra Luna Ramos estimó que eso sólo es consecuencia de la imposición de la multa.

La señora Ministra Piña Hernández advirtió que, de resultar fundado ese agravio, se anularía la multa, aunque estuviera bien impuesta.

La señora Ministra Luna Ramos cuestionó si el juez sólo tendría facultades para multar, pero no para girar el oficio para hacerla efectiva.

La señora Ministra Piña Hernández contestó que, no obstante, el agravio existe, pero se declara infundado en el proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales precisó que la materia de la discusión no estriba en ese aspecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando segundo, relativo a la procedencia, la cual se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos tercero, cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la legitimación y oportunidad, al acuerdo impugnado y a la vista del incidente



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de inejecución 550/2015, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando sexto, relativo a la decisión. El proyecto propone declarar, por una parte, infundados los agravios de la autoridad recurrente y, por otra, fundados pero inoperantes. Así, no prosperaron los argumentos de indebida motivación, vinculación incorrecta, insuficiente plazo y otros relacionados con la supuesta insuficiencia presupuestal para cumplir la ejecutoria de amparo.

Precisó que la propuesta reconoce que el acuerdo combatido no citó precepto legal para girar oficio al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que llevara a cabo los trámites necesarios para la imposición de la sanción económica de que se trata; sin embargo, aunque el agravio resulta fundado, es inoperante porque no afecta la validez de la determinación recurrida, en tanto que el referido oficio representa únicamente un acto necesario para hacer efectiva la citada multa, lo cual es consustancial a los fundamentos y motivos que la sustentan.

Por tanto, al resultar infundados los agravios restantes, se propone confirmar la multa impuesta.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Modificó el proyecto para atender a las observaciones formales remitidas, las que se atenderán en el engrose respectivo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales consultó si la queja debió quedar sin materia, dada la resolución, en la sesión anterior, del incidente de inejecución de sentencia 550/2015.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo apuntó que, independientemente del análisis oficioso del incidente de inejecución de sentencia 550/2015, es importante dar oportunidad a la autoridad afectada de expresar los agravios en torno a la multa impuesta. Por ello, optó por la técnica de contestar uno a uno los agravios hechos valer en esta queja.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales preguntó si este análisis de fondo implicaría estudiar de nuevo la ejecución de la sentencia.

La señora Ministra Piña Hernández aclaró que el proyecto estipula que es inoperante determinado agravio porque lo implicado se determinó en el incidente de inejecución de sentencia aludido. Asimismo, puntualizó que hay agravios específicos que no se analizaron en dicho incidente y que se contestan en la propuesta.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando sexto, relativo a la decisión, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Pérez Dayán obligado por la mayoría y por diversas consideraciones y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Medina Mora I. y Laynez Potisek votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

II. 120/2015

Recurso de queja 120/2015, interpuesto por el titular de la Dirección General de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en contra de auto dictado el veinticuatro de julio de dos mil quince, por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto 1309/2013-IX, por el que se le impuso multa. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *"PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por [REDACTED] por propio derecho y como titular de la Dirección General de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. SEGUNDO. Se confirma la multa impuesta en acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil quince, en los autos del juicio de amparo 1309/2013-IX, instruido en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México"*.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la reiteración de las votaciones emitidas y las modificaciones realizadas en el recurso de queja 119/2015, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Por tanto, las votaciones correspondientes deberán indicar:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando primero, relativo a la competencia.

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando segundo, relativo a la procedencia. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los considerandos tercero, cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la legitimación y oportunidad, al acuerdo impugnado y a la vista del incidente de inejecución 550/2015.

Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Pérez Dayán obligado por la mayoría y por diversas consideraciones y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando sexto, relativo a la decisión. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Medina Mora I. y Laynez Potisek votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las doce horas con cincuenta y dos minutos y reanudó la sesión a las trece horas con veintiséis minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

III. 28/2015-CA

Recurso de reclamación 28/2015-CA, derivado de la controversia constitucional 53/2015, promovida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En el proyecto formulado por la señora Ministra Norma Lucía Piña



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Hernández se propuso: *“PRIMERO. Es infundado el presente recurso de reclamación. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de cinco de octubre de dos mil quince, dictado en la controversia constitucional 53/2015”.*

La señora Ministra ponente Piña Hernández presentó el asunto. Recordó que se abordó en la sesión de treinta de mayo de dos mil dieciséis, en el sentido de declararlo fundado, y se votó en contra por una mayoría de siete votos. El proyecto actual propone declarar infundado el recurso de reclamación, derivado del auto por el cual se desechó la demanda de controversia constitucional.

Aclaró que los primeros considerandos ya habían sido votados y que el nuevo proyecto únicamente varió en cuanto al estudio de los agravios.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la procedencia del recurso, a la oportunidad y legitimación y a los agravios, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Cossío Díaz observó que el resultando octavo del proyecto da cuenta de la aprobación



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

previa de varios temas procesales; sin embargo, se hicieron algunos cambios, por lo que solicitó revisar que queden igual a como fueron aprobados.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea recordó que, en la referida sesión, votó a favor del proyecto presentado, por lo que se reiteró en ese sentido, por las razones expresadas en su momento.

El señor Ministro Cossío Díaz estimó que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos tiene legitimación pues, como órgano constitucional autónomo, no puede restringirse de la manera en que lo hace el proyecto, por lo que votará en su contra y emitirá voto particular.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo al estudio, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo con precisiones, Piña Hernández, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Laynez Potisek votaron en contra. Los señores Ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos particulares.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con treinta y tres minutos, previa convocatoria que emitió a los





Sesión Pública Núm. 31

Martes 18 de abril de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves veinte de abril del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN